

Facilidades negativas para la paz en España

21 de octubre de 1937

Se comprende fácilmente que cuando escribo facilidades «negativas» para la paz quiero decir la ausencia de obstáculos que podrían oponerse a ella. También hay otras facilidades, positivas, y hablaré de ello otro día; pero debo empezar por las primeras, que son sin duda grandes desgracias por su origen, por su naturaleza y por sus consecuencias, y que, sin embargo, por el efecto de una ley de compensación, ofrecen ventajas considerables para llegar a la paz, que es la gran necesidad de España y del mundo entero.

Aquí están estas facilidades negativas:

La primera: no es necesario, para establecer en España un nuevo orden jurídico, destruir una legalidad constitucional, que no existe. No discutiremos esa afirmación mirando la zona nacionalista; pero la diferencia evidente en provecho del otro lado queda como una apariencia. Hay evidentemente una situación menos violenta en ese sentido: hay una fuerza más trabada, menos disfrazada y eficaz. El gobierno es menos autoritario por el hecho de que es menos obedecido por sus partidarios. Pero allí lo arbitrario reina por todas partes, y en cierto sentido parece aún más lamentable el tener una legalidad para olvidarla y violarla sin tregua. Podemos constatar así que «menos», adverbio cuantitativo, apunta en esa comparación a los grados de cantidad más que a los matices de calidad. ¡En fin! Hay una zona de revolución y otra de rebelión. Ésta desencadenada contra aquélla y recíprocamente.

Me concederán de buen grado que soy la persona más obligada, aún ahora, a conocer la Constitución española. Sin embargo, puedo decir, después de un reflexionado examen de esa Constitución, que hay artículos secundarios, de una previsión lejana —que deberíamos haber suprimido— para los cuáles la ocasión de aplicarlos o de violarlos aún no ha llegado; pero todos los demás artículos, los fundamentales, aquéllos de aplicación frecuente, aquéllos que deben absolutamente figurar en una Constitución, están desgarrados, y ésta ha sido completamente destruida. ¡Ha sido asesinada por aquéllos mismos que la declaraban irreformable! No está enterrada, después de su violenta

muerte, pero una preocupación tal sólo aumenta la profanación. Conservamos el cadáver de la Constitución porque es útil para engañar —sobre todo en el extranjero— a aquéllos que quieren u ordenan ser así engañados.

La pobre Constitución española era la más defectuosa, la menos viable, entre todas las que existen en el mundo, y entre las que España ha padecido. Conducía a la guerra civil, y herida mortalmente antes incluso que ésta estallara, no pudo resistir. Condenada a desaparecer, por la exigencia vital de la salud de España, si esa Constitución hubiera de ser restablecida un momento, para ser abrogada incesantemente, tendría pues necesidad de resucitar para morir, porque ya está muerta.

Descombrado el terreno, podremos construir como queramos... en republicano claro está. Es la única limitación razonable.

Segunda facilidad negativa: No fue necesario, para establecer en España un gobierno regular y transaccional sacrificar otro, creado y protegido por el Derecho y servidor de éste. Cualquiera que sea el nuevo poder, será más legítimo que lo son aquéllos que deberán borrarse delante de él para hacerle sitio.

Esta proposición no es más que un corolario del interior, si miramos desde la perspectiva de su funcionamiento, los poderes que luchan allí; pero es asimismo evidente si tenemos en cuenta sus orígenes.

Una vez más, el problema no se plantea del lado de Salamanca. Otro acto de fuerza puede producir una situación de hecho y fundar otro mandamiento seguido y obedecido; pero el éxito militar, si fuese el más completo, no bastará jamás para construir por sí mismo un orden y un Estado de Derecho. Así existe una nueva diferencia, que es sin embargo siempre de apariencia, como en el problema de la respetada legalidad constitucional.

Bastará con examinar los otros poderes según la Constitución de 1931: la Cámara y la presidencia de la República, ésta en relación estrecha con el gobierno, esas dos autoridades siempre difícilmente separables y totalmente confundidas desde el mes de mayo de 1936. La presidencia de la República, absorbida completamente por el gobierno durante sus dos primeros gabinetes de dirección republicana e inverosímil; fue a su vez borrada por su tercer ministerio de dirección socialista, y no consiguió renacer con el cuarto.

En cuanto a la Cámara, es incontestable que la mayoría relativa, cercana a la mayoría absoluta, fue legítima en provecho de la extrema izquierda en las elecciones de febrero de 1936; pero la mayoría aplastante en la que se convirtió fue el resultado de los excesos más violentos e ilegítimos: la falsedad de los escrutinios con ayuda del desorden público; la proclamación arbitraria en la

Cámara de candidatos derrotados, siguiendo el mismo capricho con el que despedían a los diputados elegidos; la anulación masiva de los mandatos, las nuevas elecciones dirigidas por la violencia...

Pero hay una cosa más grave. La Cámara después queda profundamente cambiada en su composición por los crímenes más horribles. No fue renovada por unas elecciones parciales, que hubieran permitido seguir las corrientes de opinión. Fue disminuida por el asesinato de diputados que cayeron víctimas del odio de uno y otro lado. La Cámara fue, así, más que diezmada por el efecto de varias docenas de asesinatos: los asesinados ya no pueden ocupar escaño, mientras que los responsables directos y principales de los crímenes pueden mostrarse y ocuparlos, quitándoles toda autoridad moral y jurídica.

Si la Cámara no fue reducida físicamente a menos de la mitad, fue debido al exilio o la huida de los diputados. Nunca, a pesar de posibles negociaciones, se pudo presentar, como diputados asistentes a las sesiones, más que 185 en un Parlamento de 473. Y esa cifra es sospechosa, porque ofrece una extraña coincidencia, que el cálculo de las probabilidades desaprobaría, con el quorum establecido oblicuamente por una reforma derechista del reglamento, que fue desde luego tan audaz como censurable, y de una constitucionalidad demasiado dudosa.

En lo que atañe a la presidencia de la República, bastará con recordar que ésta, preparada por golpes de Estado parlamentarios, es consecuencia de las elecciones de «compromisarios» del 26 de abril de 1936, que fueron la farsa más nula y mal avenida que la historia de las malas costumbres electorales haya registrado.

Preveo que mi artículo irritará al fanatismo rojo y disgustará al fanatismo blanco y negro. Anuncio que el próximo irritará a la extrema derecha sin gustarle a la extrema izquierda. Es mi destino, o mejor dicho, es el dictamen de los imperativos de conciencia el que me ordena decir lo que conviene a la verdad de la situación y al interés de España.